

Con fecha 24 de enero de 2021 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio solicitud de acceso a la información pública formulada por [REDACTED] al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La solicitud quedó registrada con el número 065016.

El texto de la solicitud de información es el siguiente:

*“A la atención del Instituto Nacional de Ciberseguridad Con amparo a la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, me gustaría solicitar la siguiente documentación: Lista de participantes en la “Consulta Pública al Mercado para la definición de actuaciones de impulso de la ciberseguridad a través de la Compra Pública Innovadora y la elaboración del Mapa de Demanda Temprana” Asimismo, en caso de ser posible, solicitaría que se añadiera una relación de proyectos con su presupuesto estimado con diferenciando siempre cuánto de este presupuesto sería sufragado por recursos públicos. Además, siempre que sea posible, solicitaría que los datos proporcionados se me enviaran en formatos reutilizables como .pdf y .xlsx Muchas gracias por adelantado, Un cordial saludo, José Manuel Rodríguez Silva Madrid, 24/01/2022”*

El 14 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo de un mes para su resolución previsto en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se recibió esta solicitud en el Instituto Nacional de Ciberseguridad M.P. S.A., que es el órgano competente para resolver.

A la vista de la solicitud, este Instituto Nacional de Ciberseguridad resuelve denegar el acceso a la información requerida por [REDACTED], y todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 14.1.h) y 14.1.k) de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual el derecho de acceso podrá ser limitado cuando a) el acceso a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, y b) cuando el acceso a la información pueda perjudicar la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.

Por un lado, en las manifestaciones de interés remitidas a esta Secretaría de Estado las entidades interesadas presentan, entre otra información, potenciales proyectos relacionados con el impulso a la ciberseguridad, por lo que, en caso de publicarse los resultados de las mismas, tal y como se solicita en la petición, cuando el expediente aún no ha finalizado, se podrían ver comprometidos los intereses económicos y comerciales de las entidades que han participado en la consulta

pública, puesto que se trata de ideas propias de los interesados que serían susceptibles de apropiación por parte de terceros.

Por otro, el acceso a la documentación del trámite de audiencia puede perjudicar la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión de los interesados que presentaron proyectos sin tener conocimiento de que las mismas podían hacerse públicas, y que, por lo tanto, podrían ver perjudicados sus intereses de llevarse a cabo la publicación de dichas alegaciones.

En todo caso, cuando el expediente finalice, se publicará el preceptivo informe al que se refiere al art. 115.3 de la Ley de contratos del Sector Público.

No obstante, se aporta información sobre la iniciativa a la que se refiere la consulta:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad M.P., S.A. (INCIBE), hasta el 28 de octubre de 2014 INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.), impulsa la **Compra Pública Innovadora (CPI)** como instrumento para la ejecución de actuaciones y proyectos que aceleren el proceso de digitalización de las empresas españolas en todo lo relativo a la ciberseguridad, así como para apoyar el desarrollo de una industria nacional competitiva en este campo. Esta actuación se enmarca dentro de las inversiones previstas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para elaborar el **Mapa de Demanda Temprana de INCIBE**, un listado de necesidades sin solución actual en el mercado detectado en materia de ciberseguridad, se publica la presente Consulta al Mercado con el objetivo de identificar actuaciones, instrumentos y posibles proyectos que licitar mediante la Compra Pública Innovadora.

Los objetivos de esta consulta al mercado son:

- Informar al mercado de las actuaciones que se impulsarán a través de la Compra Pública Innovadora.
- Conocer las propuestas de proyectos concretos que —en cada una de esas actuaciones— permitan a INCIBE elaborar un Mapa de Demanda Temprana y diseñar los instrumentos para la ejecución de cada una de las actuaciones identificadas.
- Dotar a INCIBE de la información necesaria para el diseño detallado de los instrumentos de ejecución de las actuaciones (procedimientos, pliegos y contratos).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente:

La Directora General del Instituto Nacional de Ciberseguridad M.P., S.A. (INCIBE)

Firmado por [REDACTED] ROSA MARIA  
DIAZ (R: [REDACTED])  
Directora General Instituto Nacional de  
Ciberseguridad (INCIBE)  
el día 01/03/2022  
con un certificado emitido por AC